

Competitividad:

la palabra, los hechos y el riesgo
el sinceramiento de un Estado
caro que debe transparentar
impuestos y gestiones

escribe
Tabaré Viera



Un ministro y su
política del «siga, siga»
Ricardo Acosta

Gobernar
jugando al empate
Daniel Manduré

La cultura
que la derecha dejó vacía
Luis Marcelo Pérez

Los reales desafíos
de la formación docente
Claudio Rama

Competitividad: la palabra, los hechos y el riesgo

La competitividad no es un eslogan. Es la condición básica para que un país pequeño, abierto y lejano como el Uruguay pueda crecer, generar empleo y sostener el bienestar. Sin competitividad, no hay inversión; sin inversión, no hay trabajo; y sin trabajo, el tejido social se resiente.

En este primer año de gobierno del Frente Amplio, la palabra «competitividad» ha estado presente en el discurso oficial, particularmente en las intervenciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone. Ha reconocido, con acierto, que Uruguay enfrenta problemas estructurales: costos elevados, atraso relativo en productividad, presión fiscal significativa y dificultades para insertarse dinámicamente en la región y el mundo.

Hasta ahí, coincidimos. El problema empieza cuando pasamos de las palabras a los hechos.

El propio ministro ha señalado la necesidad de mejorar la competitividad sistémica: logística, costos energéticos, regulación, inserción internacional. También ha advertido sobre las restricciones fiscales y la necesidad de sostener la solvencia macroeconómica. Sin embargo, las primeras señales de política no han ido en esa dirección.

Por el contrario, lo que vemos es un deterioro de las expectativas fiscales, algo que desde la oposición advertimos, y una creciente probabilidad de ajustes que recaerán, directa o indirectamente, sobre el sector productivo.

La pregunta es inevitable:

¿Puede un país mejorar su competitividad si aumenta la carga fiscal, encarece sus costos y reduce los incentivos a producir e invertir?

La evidencia indica lo contrario.

En estos meses hemos observado señales preocupantes: empresas que cierran o reducen actividad;

sectores industriales con dificultades para sostener mercados; comercio de frontera golpeado por la asimetría de precios; y, lo que es más significativo, sectores dinámicos, como el software, que comienzan a advertir pérdida de competitividad.

Cuando incluso los sectores más innovadores sienten el impacto, el problema ya no es coyuntural: es estructural.

El gobierno ha planteado que parte de la solución vendrá por la vía de una mayor «eficiencia recaudatoria». Es decir, recaudar mejor sin subir impuestos. Pero la experiencia, en Uruguay y en el mundo, muestra que ese camino tiene límites claros. Cuando esos límites se alcanzan, el ajuste aparece por otras vías: más presión tributaria, menos gasto productivo o mayores costos indirectos.

Ahí está el riesgo.

Porque un ajuste fiscal mal diseñado puede transformarse en un factor adicional de pérdida de competitividad. Más impuestos, tarifas elevadas o rigideces regulatorias terminan trasladándose a los precios, reduciendo márgenes, frenando inversiones y, finalmente, afectando el empleo.

No se trata de negar la importancia del equilibrio fiscal. Se trata de advertir, como ha señalado el propio ministro, que «la consolidación fiscal es necesaria, pero su calidad importa»: no cualquier camino hacia ese equilibrio es neutro para la economía real.

¿Qué deberíamos hacer?

Primero, reconocer que la competitividad es un problema transversal del Estado. No se resuelve solo desde el Ministerio de Economía. Requiere decisiones en energía, combustibles, logística, regulación laboral, inserción internacional y gasto público.

Segundo, evitar cualquier incremento de la carga fiscal sobre los sectores productivos. En un país caro, subir costos es condenar actividad.

Tercero, avanzar decididamente en la apertura comercial. Uruguay necesita más mercados, no menos. Cada barrera que se mantiene es una oportunidad que se pierde.

Cuarto, revisar el costo del Estado. No para debilitarlo, sino para hacerlo más eficiente. Un Estado pesado termina siendo un lastre para quienes producen.

Quinto, dar señales claras y estables a la inversión. La incertidumbre es enemiga de la competitividad.

Finalmente, asumir que el crecimiento no vendrá por decreto ni por relato. Vendrá por condiciones reales que hagan viable producir, exportar y generar empleo.

Hoy, esas condiciones están en riesgo.



Tabaré VIERA DUARTE

Senador. Fue intendente de Rivera, presidente de Antel, director de Ose diputado, Vicepresidente del Congreso de Intendentes y ministro de Turismo.



El Uruguay ha construido, con esfuerzo, una reputación de seriedad y estabilidad. Pero la estabilidad, sin competitividad, es apenas una ilusión estática. Y un país que se queda quieto en un mundo que se mueve, en realidad, retrocede. La advertencia está hecha.

El desafío es actuar antes de que los costos sean mayores.

CONTENIDOS

Redactor Responsable

Tos César GARCÍA ACOSTA.

Domicilio:

Martín C. Martínez 1630/401
Montevideo-Uruguay

Teléfono:

098686686

Registro MEC

Nº 2169/07, Tomo VI, fs. 388

Registro de Ley de Imprentas

Web: opinar.com.uy

Contacto:

cesargarciacosta@gmail.com

2 competitividad: la palabra, los hechos y el riesgo. **TABARÉ VIERA** **3** Siga, siga. **RICARDO ACOSTA** **4** Los primeros días de mañana. **GUSTAVO GÓMEZ RIAL** **5** Gobernar jugando al empate. **DANIEL MANDURÉ** **6** Elecciones 2026: el voto desinformado que frena el desarrollo. **DAVID AURIS VILLEGAS** **6** Plantean revisión de impuestos **MARCELO GIOSCIA** **7** Los reales desafíos de la formación docente. **CLAUDIO RAMA** **8** El péndulo vuelve. **GUZMÁN A. IFRÁN** **8** Solo nos hundan en materia fecal. **WASHINGTON ABDALA** **9** La cultura que la derecha dejó vacía. **LUIS MARCELO PÉREZ** **10** Movimientos de cascara y medias tintas. **ZÓSIMO NOGUEIRA** **11** ¿Qué esperar en tiempos de crisis moral? **LORENZO AGUIRRE** **12** Mitología charrúa. **JULIO MARÍA SANGUINETTI**





Ricardo ACOSTA CALVO
Periodista

Hay cosas que no cambian.
O, mejor dicho: hay cosas que sí cambian... pero dependiendo de quién esté en el gobierno.
Durante años, la seguridad fue el tema central. Cada rapiña, cada homicidio, cada hecho violento se transformaba en un debate nacional. Había conferencias,



reclamos, presión política constante y una sensación clara de que lo que pasaba en la calle tenía consecuencias en el poder.

Hoy, con hechos similares —y en algunos casos más visibles—, el clima es otro.

No es que no pase nada.

Pasa. Y pasa mucho.

Robos en modalidad «piraña», ajustes de cuentas, violencia que se repite en distintos puntos del país. Escenas que ya no sorprenden porque se volvieron parte de la rutina informativa. Pero lo que cambió no es solo el delito. Lo que cambió es la reacción.

Porque mientras los números oficiales intentan mostrar una tendencia a la baja, la percepción en la calle cuenta otra historia. Y en política, la percepción no es un detalle menor: es muchas veces la base sobre la que se construye la confianza o el rechazo.

Ahí aparece la pregunta incómoda.

¿Por qué lo mismo genera reacciones distintas?

¿Por qué antes cada episodio era una crisis y hoy parece un dato más dentro del paisaje?

La reciente interpelación al ministro del Interior dejó en evidencia algo más profundo que una discusión de cifras. Más allá de los números, lo que quedó sobre la mesa fue una diferencia de enfoque. Desde la oposición, voces como las de Tabaré Viera y Pedro Bordaberry marcaron con claridad que el problema no es solo qué dicen las estadísticas, sino qué está pasando realmente en la calle.

Y ahí es donde el discurso empieza a hacer ruido.

Porque se puede discutir si los delitos bajaron uno o dos puntos. Se pueden comparar períodos, metodologías, contextos. Pero hay algo que no entra en ninguna planilla: la sensación de que la violencia sigue presente.

Siga, siga

Y más aún: la sensación de que ya no genera la misma reacción.

Antes había presión.

Hoy hay explicación.

Antes había urgencia.

Hoy hay contexto.

Antes había responsabilidad política inmediata.

Hoy parece haber margen para interpretar.

Y eso es lo que incomoda.

Porque cuando la vara cambia según quién gobierna, el problema deja de ser únicamente de seguridad y pasa a ser político.

No se trata de negar los datos ni de desconocer la complejidad del tema.

Gobernar la seguridad nunca fue fácil. Pero tampoco lo era antes. Y, sin embargo, el nivel de exigencia era otro.

Hoy, en cambio, da la sensación de que muchas jugadas siguen... aunque la falta sea evidente.

Se naturaliza.

Se relativiza.

Se explica.

Y en ese proceso, lo que se pierde es algo más importante que una discusión de cifras: se pierde la coherencia.

Un gobierno no solo se mide por lo que hace, sino también por cómo reacciona frente a lo que pasa. Y una oposición no solo se define por lo que critica, sino también por lo que tolera cuando le toca estar del otro lado.

Por eso, el problema ya no es solo la inseguridad.



Es la vara con la que se mide.

Porque cuando el delito deja de escandalizar según quién esté en el poder, cuando la reacción depende del color político y no de la gravedad del hecho, el mensaje que se transmite es peligroso.

No para un gobierno.

Para todos.

Porque en ese escenario, la política deja de ser una herramienta para resolver problemas y pasa a ser un filtro que los acomoda según conveniencia.

Y mientras tanto, en la calle, la realidad sigue su curso.

Con violencia.

Con miedo.

Con incertidumbre.

Pero con una diferencia cada vez más clara:

la falta está...

y nadie la cobra.



Los primeros días de mañana

Gustavo GÓMEZ RIAL
Abogado. Escritor



Podrían suceder ahora: el rumbo inteligente, un horizonte promisorio. Los Primeros Días de Mañana, aunque no los Últimos Días del Hoy. Estamos en el punto de inflexión. Debemos tomar conciencia de las oportunidades que se presentan para esta gran República poco poblada, aunque orgullosa de sí misma y aún respetada en el foro internacional.

Podemos reaccionar a tiempo y generar la voluntad política capaz de afrontar los desafíos que esta tecnología impone con su capacidad de disrupción, fortaleciendo el tejido productivo y social; para abrir puertas y anticiparnos, evitando las secuelas de la ineludible transición.

La carrera está en marcha. Quienes deberían asumir el liderazgo aún caminan de espaldas a lo que se viene. ¿Es una distopía incapaz de alcanzarnos reflejada en los medios informativos? De alguna forma vamos a arreglarnos. ¡Confiemos



en san Cono para conseguir trabajo! ¿Son conscientes de que las transformaciones empiezan a sucederse a un ritmo exponencial que supera al de todo el siglo XX y lo que llevamos de este?

Presten oídos a las advertencias que académicos de larga trayectoria y líderes de la propia industria de la IA (incluyendo algún premio Nobel) vienen haciendo a los gobiernos, a las empresas y a cualquier ser humano que proyecte su futuro.

Esto no se arregla con prédicas ni súplicas. Pero existe un proyecto de Código Civil para la Inteligencia Artificial (del cual aquí compartí artículos), fruto de un esfuerzo largo y paciente, a disposición de todas las fuerzas políticas que, si me honrasen en someterlo a estudio, precisará el apoyo de las mayorías.

Mi empeño, sin embargo, es impulsarlo desde nuestra casa -la del Partido Colorado- para su estudio y consideración.

Nunc aut nunquam: Para un mundo en permanente construcción y deconstrucción, esta herramienta legal de orden y de ideas, quiere postularse como un instrumento que aporte las estrategias proactivas de anticipación y que aún demandarán tanta determinación como esfuerzo y valentía cívicas.

DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO SOBRE EL CÓDIGO GENERAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL El Proyecto de Código General de Inteligencia Artificial establece un marco regulatorio que prioriza la demostración empírica de seguridad técnica sobre la carga burocrática documental. A diferencia de modelos normativos comparados que se centran en el control estático (como la *AI Act* de la Unión Europea y las directrices sectoriales de Estados Unidos), este proyecto propone un sistema de evaluación dinámica y proporcional al riesgo, aplicable antes y durante el despliegue de la tecnología.

Distribución de la Responsabilidad

El texto resuelve el desafío de la opacidad algorítmica distribuyendo las cargas jurídicas a lo largo de la cadena de valor. Obliga al desarrollador a proveer un sistema seguro por diseño y responsabiliza al implementador o usuario

profesional si este altera los parámetros de seguridad, desatiende las advertencias o hace un uso negligente. Esta delimitación protege el desarrollo tecnológico local y otorga garantías de reparación a los ciudadanos frente a daños concretos, basándose en la exigencia de registros inalterables que viabilizan la prueba en sede judicial o administrativa.

Integración Institucional y Eficiencia del Estado

El diseño del Código se fundamenta en la coordinación y evita la superposición de competencias. La creación de la Agencia para la Inteligencia Artificial (AIA) se articula de forma preceptiva con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), la Dirección Nacional de Aduanas, el LATU, el Banco Central y los distintos Ministerios. Mediante mecanismos de encomienda de gestión, comités técnicos conjuntos y servicios compartidos, el Estado busca optimizar sus capacidades instaladas. Este enfoque previene la creación de estructuras macrocefálicas y asegura que el contralor tecnológico no paralice la actividad económica ni la función pública.

Puntos de Tensión y Desafíos de Implementación

La aplicación efectiva de esta normativa enfrentará cuellos de botella estructurales y operativos, los cuales el proyecto intenta minimizar mediante herramientas específicas:

Capacidad Técnica y Retención de Talento: La exigencia de auditar y fiscalizar sistemas complejos requiere un Estado dotado de infraestructura computacional y personal altamente especializado, recursos actualmente escasos frente a la demanda del mercado. Para mitigar esta asimetría, el Código integra a la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento (SENCI), habilita la homologación de auditores del sector privado y universitario, y promueve el financiamiento cruzado para retener talento, descongestionando el monopolio de la labor evaluadora estatal.

***El contenido titulado como Dictamen Técnico-Jurídico fue elaborado mediante asistencia de Inteligencia Artificial. Dario Amodei, CEO de Anthropic: «La IA es un tsunami que se nos viene encima, pero la gente solo cree que es un efecto óptico»**

Eficacia Transfronteriza y Gobernanza Global: La fiscalización de servicios proveídos por corporaciones extranjeras sin presencia física en el país, así como el control de flujos de datos transnacionales, superan la capacidad de imperio unilateral de cualquier Estado. Como respuesta estratégica a esta limitación material, el Código instituye la promoción del «Pacto de Montevideo». Este instrumento diplomático se plantea como el mecanismo indispensable para forjar acuerdos de reciprocidad, estándares compartidos de seguridad y cooperación jurisdiccional a nivel regional e internacional.

Conclusión

El Código constituye un instrumento de derecho positivo realista y proporcionado. Su principal aporte radica en trasladar el eje del control desde la exigencia técnica de comprender la matemática interna del algoritmo, hacia la exigencia jurídica de garantizar la trazabilidad de sus resultados y la responsabilidad de sus operadores humanos. Es un marco que dota a la República de las herramientas necesarias para gobernar la adopción de la inteligencia artificial salvaguardando el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la soberanía nacional.

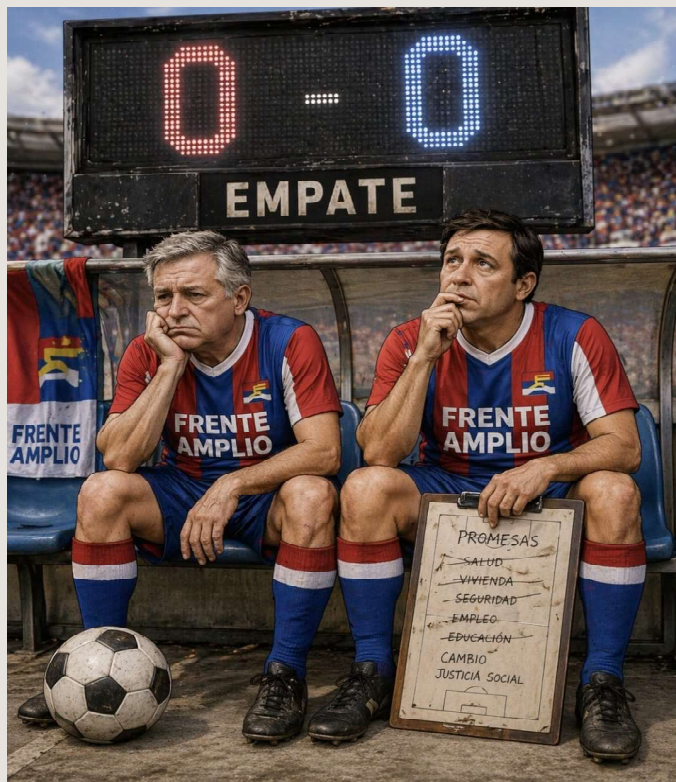


Daniel MANDURÉ
Convencional del PC. Fue Edil por Montevideo

Gobernar jugando al empate

Nunca estuve de acuerdo con aquellos equipos de fútbol que juegan al empate. Que no arriesgan y carecen de ambición. Eligen no ganar, no sumar de a tres y quedarse casi estancados en la tabla de posiciones. Jugando a la retranca, con tal de no terminar derrotados. Con ello corren el riesgo de que le hagan un gol en los descuentos y terminen perdiendo igual. Quedándose con las manos vacías.

Esta situación va generando gran disgusto en la tribuna. La parcialidad quiere ver un equipo ganador, que se esfuerza en hacer las cosas bien, que va para adelante, que corre riesgos. Que no es timorato. Que deja todo en la cancha. Si esto no sucede, la hinchada comienza a perder la paciencia, a abuchear al equipo, al entrenador y a las autoridades. El apoyo comienza a transformarse en desconfianza. Llegan a gritar decepcionados: «¡que se vayan todos!». Porque antes de iniciar el campeonato prometieron triunfos, títulos y gloria y ya con el campeonato en rodaje no vienen cumpliendo con nada de lo prometido. La



hinchada termina llegando a la conclusión de que: «este cuadro sin identidad no es ni cerca de lo que prometió ser».

Al final terminan peleando el descenso.

Si bien gobernar es cosa muy seria y no es una contienda deportiva podemos ver cierta similitud entre el gobierno actual y un equipo de fútbol que se comporta de esa forma.

Porque hoy el Frente Amplio conduciendo al país está jugando al empate.

Gobernando a los tirones, improvisando, que va para atrás y para adelante, entre aclaraciones, contradicciones y discrepancias permanentes que son cada vez más notorias. Timorato, que no avanza y que está confundido. Que no arriesga. Así es la gestión del Frente Amplio. Desabrida, porque no es ni chicha ni limonada.

El Frente Amplio parece estar más preocupado en lograr la paz interna que en gobernar. Por dejar a todos contentos terminan dejando a todos calientes. A propios y a ajenos.

Hoy las encuestas, no una, todas ellas, lo muestran con claridad. La hinchada está decepcionada. Hasta los más fanáticos seguidores muestran su descontento. Exigen soluciones que no ven.

El Frente Amplio no está atravesando diferencias menores, ni matices, está atrapada en un tironeo continuo entre sectores que empujan en direcciones opuestas, que se bloquean mutuamente.

En física, cuando dos fuerzas de igual magnitud actúan en sentido contrario, se neutralizan. El resultado es una fuerza neta de cero. No hay movimiento. Todo queda en un aparente equilibrio, pero estancados. Ese principio explica con precisión lo que sucede hoy con el Frente Amplio. Paralizados, inmóviles.

La fuerte lucha ideológica interna no deja avanzar al gobierno.

El problema no es la diversidad de opiniones, que afloran diferencias de criterio. Es natural que suceda, sobre todo, en coaliciones donde hay miradas diferentes. Incluso, si son bien canalizadas pueden ser enriquecedoras. El problema es cuando esas diferencias no se administran bien, cuando la diversidad sustituye el rumbo. Cuando esa dualidad de criterio permanente bloquea el avance del país. Cuando lo que la ciudadanía percibe ya no son solo diferencias de puntos de vista sino un gran barullo interno y confusión. Que terminan convirtiendo al gobierno en un gran conventillo.

Están apareciendo diferencias en casi todos los temas esenciales que hacen a la vida del país.

En economía, la lucha diaria del ministro Oddone es continua. Por un lado, la moderación y estabilidad por el otro la exigencia de más gasto, aunque sea castigando al ciudadano con más impuestos.

Algunos impulsando un impuesto del 1% a los más ricos, otros oponiéndose. Unos apoyando las 6 horas laborales otros diciendo que no es el momento para ello.

Unos exigiendo que las empresas preavisen al momento de realizar despidos, otro opinando que eso ahuyenta inversores.

Unos con un túnel por 18 de Julio otros bloqueando esa propuesta. Un futuro ministerio de justicia que no tiene unanimidades absolutas en la coalición gobernante.

En seguridad el péndulo se mueve entre la firmeza para combatir el delito y por otro lado su oposición a la mano firme. La gradual liberación de más de 2000 presos de delitos graves era la «sellada». Dieron marcha atrás y por suerte parece que no va a prosperar.

Varios critican la gestión del Mides y del ministro Civila, otros intentan defenderla y algunos buscan poner paños fríos y piden calma.

En política internacional sucede lo mismo, moviéndose entre el fanatismo ideológico de muchos, apoyando ciegamente al club de amigos, frente a la sensatez pragmática de unos pocos.

En relación con los sindicatos la relación íntima con el Pit Cnt deja en evidencia una vez más esa imposibilidad de moverse con libertad. El gobierno no toma decisiones con independencia, la presión del movimiento sindical, a la que se le debe mucho desde lo electoral, es mucha y pesa.

Todas esas diferencias y muchas otras neutralizan a cualquier gobierno. Mas aun cuando hay ausencia de liderazgo.

Ya han perdido el primer año de gobierno, comenzó a avanzar el segundo y deben solucionar sus contradicciones internas permanentes o seguirán como hasta ahora administrando su propia parálisis.

Esa parálisis en política no es neutral. Tiene un costo. Y siempre la termina pagando la sociedad.

Tensiones internas fuertes que son difíciles de disimular. Mas que un gobierno parecen una suma de sectores en tensión permanente. Los problemas internos que deberían resolverse puertas adentro se trasladan a la gestión. En el medio de ese inocultable embrollo interno está la ciudadanía que no entiende nada y espera soluciones.

Los hechos confirman que asumieron sin programa y lo van armando ahora, en la marcha, a pura improvisación. Sin hoja de ruta y con medidas desarticuladas. Promesas postergadas u olvidadas. Un sector lanza una idea y otro la tranca o la bloquea. ¿Se acuerdan cuando decían que en su gobierno por lo removedoras y renovadoras de sus propuestas iban a temblar hasta las raíces de los árboles? Bueno, hoy los únicos que tiemblan son los uruguayos, de miedo por la inseguridad reinante.

De seguir jugando al empate el gobierno va a perder el partido, y lo va a perder con un gol en contra. Lo peor de todo en estos casos es que el que siempre pierde más es el país y su gente.



David Auris VillegasEscritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario. Creador del ABDIVCPCE.
davidauris@gmail.com

Elecciones 2026: el voto desinformado que frena el desarrollo

Tras el fragor de las elecciones 2026, en primera vuelta, sospecho que más de veintisiete millones de electores terminamos mareados al elegir entre 35 candidatos a la presidencia y miles de postulantes, desafiando una cartilla extensa que, como una pequeña sábana, habrá confundido incluso al votante más informado. Entre tanto desorden, quedó en evidencia que a los peruanos nos falta más educación ciudadana, pues muchos votaron por las promesas juveniles.

Ante esta marea de votos, el Estado promueve el voto informado. Pero, ¿existe realmente ese voto informado? Muchos ciudadanos ingresamos a la página del Jurado Nacional de Elecciones para conocer a los candidatos y, al revisar a los tres candidatos presidenciales más votados, nos sorprende que solo uno declare que posee un predio rural de diez mil dólares, pese a que los

¿Sabías que la desinformación también influye en las elecciones?

Aprender a detectarlas es clave para que tu voto sea libre y consciente.

tres residen en zonas exclusivas, lo que genera más desinformación y suspicacias. Sumemos a esta opacidad que toda la ciudadanía no comprende cómo funciona el Estado, debido a que las escuelas no forman en cultura cívica. Por lo que es importante alfabetizar a la sociedad desde la educación, a fin de conocer las funciones y responsabilidades del presidente de la República, el rol del Congreso en legislar para el desarrollo del país y las funciones del Poder Judicial, así como los deberes de los funcionarios públicos que garanticen pulcros procesos electorales.

Por otra parte, el deber de la ciudadanía es evaluar las propuestas serias de los candidatos y no seguir propuestas descabelladas, como la de indultar a un expresidente o desbancar al jefe del BCR, que lamentablemente han logrado respaldo mayoritario, como si fueran los temas más importantes del país. Estas propuestas resultan una tomadura de pelo al ciudadano.

Si bien, todos no hemos sido alfabetizados sobre el funcionamiento del Estado en la escuela, hoy contamos con internet para empoderarnos. De manera que es nuestro deber elegir al candidato presidencial que priorice la educación, ciencia e innovación como motores del desarrollo humano, y no a quien solo apela a emotivos discursos.

En consecuencia, es clave que como votanteselijamos al candidato que fortalezca la democracia y no a quienes buscan socavarla en nombre de refundar el país tomando como ejemplo naciones empobrecidas. Votemos con responsabilidad, ya que de nuestras decisiones depende el desarrollo de nuestra nación.

Marcelo GIOSCIA CIVITATE

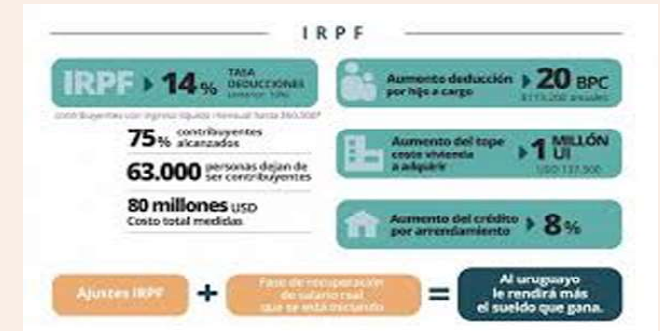
Abogado. Periodista



Plantean revisión de impuestos

La pretensión -hecha pública por el PITCNT- de gravar con un impuesto al 1% más rico de nuestra población, para destinarlo a satisfacer políticas sociales (en un momento en que muchas empresas han enviado a sus trabajadores a seguros de desempleo y otras, lisa y llanamente, han decidido instalarse fuera de nuestro país) según se ha manifestado desde el Ministerio de Economía, no es parte de las ideas «impulsadas desde esta administración».

En buen romance, esta pretensión no integraría los planes del Sr. presidente de la República. Sin embargo, las fuerzas políticas que integran el partido de gobierno, desde la UTECO (Unidad Temática de Economía) que interviene y brinda sus informes a la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio) insisten ahora con abrir un debate que comprenda la «revisión de todo el



sistema impositivo», atendiendo a un «profundo análisis de los posibles impactos sobre la actividad económica, la inversión y el consumo de los hogares», lo que según han manifestado «no supondría contemplar la creación de nuevos impuestos» sino que se podría pensar en «simplificar el sistema». Todo ello, partiendo de un concepto que advierte en nuestra sociedad «características sociales inaceptables», por lo que debiera apuntarse a crear «oportunidades para mejorar considerablemente su bienestar y su igualdad», con el objetivo de avanzar hacia una «sociedad igualitaria, fraterna y solidaria», por lo que según expresan, debe abordarse el debate impositivo con «responsabilidad política».

Esta Unidad Temática considera que, tanto el IRAE (Impuesto a las Rentas de la Actividad Económica) como el Impuesto al Patrimonio «tienen muy baja recaudación» y deberían ser «objeto de estudio», como también opinan que debería reverse el IRPF, el IMESI y también el Impuesto de Herencias, derogado en 1974 por la dictadura y piden se adapte el ITP (Impuesto a las transmisiones patrimoniales) volviéndolo fuertemente progresivo. En suma, su intención puesta de manifiesto es no sólo debatir, sino no dejar nada sin revisar, apuntando incluso a establecer un IVA «personalizado», eliminando exoneraciones y seleccionando grupos de beneficiarios.

Todo apunta a imponer mayores controles, sobre los bienes y las actividades económicas de las personas físicas y jurídicas y a establecer mayores exigencias, para lograr, en definitiva, una mayor recaudación, bajo el manto de instalar un «debate» sobre todo el sistema impositivo. Ya la reforma de 2007 que impuso el IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) le significa un muy buen ingreso a Rentas Generales y supuso afectar hasta ingresos por jubilaciones y pensiones que, en puridad no son rentas; el ITP obtiene una porción en toda operación referida a inmuebles y a bienes objeto de transmisión hereditaria. Aunque se pretenda disfrazarlo con eufemismos, de «instancias de análisis y profundos debates», se sigue pensando de qué forma se logra esa «sociedad ideal», siempre a costa de seguir afectando a quienes trabajan, invierten, producen y se arriesgan en el país real. De estimular la superación por el esfuerzo y de reducir y bajar el costo del Estado, nada.



Claudio RAMA

Ensayista, economista y profesor uruguayo, especializado en temas de gestión y políticas de educación superior de América Latina.

Los reales desafíos de la formación docente

El resultado es un círculo vicioso: se coloca frente a las aulas a docentes sin formación y, al mismo tiempo, estos postergan o interrumpen sus propios estudios debido a la carga laboral. La formación docente en Uruguay enfrenta desafíos estructurales profundos que impactan negativamente en la calidad y la eficiencia que deberían ser el centro de las políticas públicas. Los principales retos se concentran en los bajos niveles de titulación, la falta de formación de posgrado, la desvinculación estudiantil, la rigidez en la gobernanza, los programas excesivamente teóricos y una baja pertinencia con alta endogamia.

Baja cantidad de docentes titulados. Uno de los problemas más críticos es la escasa cantidad de docentes titulados, particularmente en los niveles de Educación Secundaria y UTU. Según datos de 2018, el 26,2% de los docentes de la ANEP no poseía título de formación docente, una cifra que ascendía al 30,2% en secundaria. Para revertir esta situación, resulta imperativo abrir oportunidades reales a profesionales universitarios que cuenten con posgrados

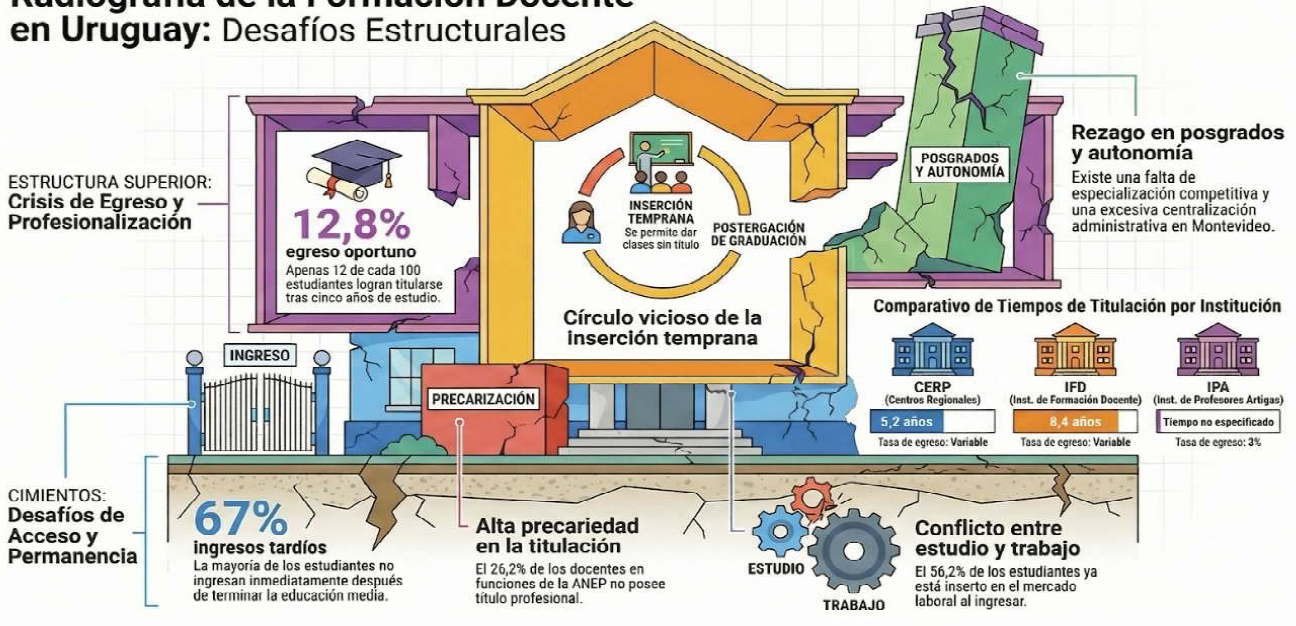
horas» del CFE que permite que estudiantes con un porcentaje muy bajo de la carrera aprobada dicten clases.

El resultado es un círculo vicioso: se coloca frente a las aulas a docentes sin formación y, al mismo tiempo, estos postergan o interrumpen sus propios estudios debido a la carga laboral.

Bajo reconocimiento universitario. Hasta el período pasado, las carreras del CFE carecían de un rango universitario formal, lo que desincentivaba la finalización de tesis o exámenes finales si el estudiante ya estaba trabajando. El programa «Docente Acreditado» y el reconocimiento de la formación universitaria a través del MEC marcó un punto de inflexión, pero lamentablemente, esta dinámica de mejora ha sido paralizada por la actual conducción del CFE. Por motivos ideológicos se frenó el proceso de profesionalización universitaria bajo estándares de calidad externos y competitivos.

Falta de posgrados de la ANEP. El sistema históricamente se ha centrado en una formación terciaria básica de cuatro años, lo que ha generado un rezago en la «posgraduarización». Hoy, una formación básica sin especialización no se alinea con los estándares globales. Si bien se formularon políticas de posgrado, una ordenanza de posgrados y nuevas maestrías propias, esas acciones han

Radiografía de la Formación Docente en Uruguay: Desafíos Estructurales



en educación, permitiendo una oxigenación del sistema pedagógico con perfiles de alta formación académica.

Ingresos tardíos a la enseñanza. Además la formación docente registra un 67% de ingresos tardíos, es decir, personas que no cursaron educación media el año inmediatamente anterior a su ingreso. Ello implica ingreso de estudiantes de mayor edad (56,2% ya insertos en el mercado laboral y 14% con hijos), lo que genera dificultades estructurales de permanencia y dedicación. El sistema actual, rígido y presencialista, no contempla estas realidades de vida, lo que deriva en una alta deserción. Ineficiencia terminal.

Baja tasa de egreso. La formación de profesores gestionada por el Consejo de Formación en Educación (CFE) muestra una bajísima tasa de egreso oportuno. A los cinco años de ingreso, apenas el 12,8% logra titularse; es decir, solo 12 de cada 100 estudiantes se gradúan en un año más del tiempo previsto originalmente, con diferencias marcadas: mientras en los Centros Regionales de Profesores (CERP) el promedio de titulación es de 5,2 años, en los Institutos de Formación Docente (IFD) se extiende a 8,4 años.

El caso del Instituto de Profesores Artigas (IPA) en Montevideo es paradigmático con 3% de egreso. En áreas críticas como Matemáticas, Física y Química, la tasa de titulación general es menor al 10%. El factor principal de este fracaso es la inserción laboral temprana fomentada por el sistema de «elección de

sido desmanteladas. Los únicos posgrados son programas conveniados con la Udelar que tienen baja garantía de calidad y altos niveles de deserción.

Endogamia y falta de pertinencia Este escenario se agrava por la «endogamia en la contratación». Los procesos de selección suelen ser cerrados o carecer de una apertura real a profesionales externos de alta formación, restringiendo la competencia basada en méritos y apoyada en un formato de valorización de la antigüedad contra los méritos de formación. Además, existe una falta de pertinencia curricular y de modernización tecnopedagógica. Es un sistema docente anclado en modelos pedagógicos del siglo pasado.

Alta centralización. Finalmente, el sistema padece de una centralización excesiva. A pesar de la descentralización geográfica de los IFD y CERP, estos carecen de autonomía administrativa y pedagógica y se han transformado en meros ejecutores de decisiones tomadas desde Montevideo por una burocracia que a menudo desconoce el contexto local. Es claro, que la reforma de la educación docente no pasa por crear una nueva universidad burocrática, sino por dotar de autonomía a los centros, flexibilizar el currículo, fomentar el posgrado competitivo, establecer estándares de calidad rígidos y apoyarse en las tecnologías de comunicación e información.



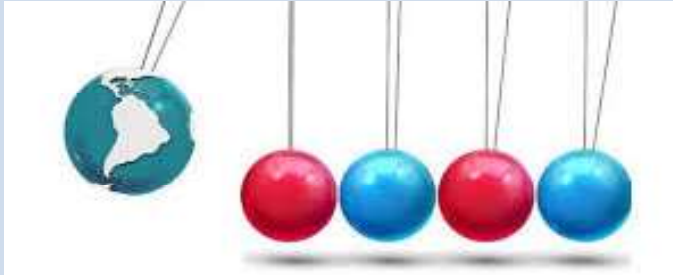
Guzmán A. IFRAN

Contador Público. Fue diputado por Montevideo y Coordinador de la Opp



El péndulo vuelve

Las recientes elecciones en Hungría marcaron el final de una etapa política que durante dieciséis años definió no solo el rumbo interno de ese país sino también parte del equilibrio estratégico dentro de la Unión Europea. La derrota de Viktor Orbán frente al opositor Péter Magyar constituye un hecho político de gran relevancia continental: no se trata únicamente de un cambio de gobierno, sino de una señal clara del electorado húngaro en favor de un reposicionamiento europeo, institucional y democrático luego de un largo período en el que el liderazgo de Orbán se consolidó como uno de los principales referentes del llamado modelo de «democracia iliberal» dentro del bloque comunitario.



Durante su prolongado ejercicio del poder, Orbán fue construyendo un sistema político crecientemente concentrado, con fuertes cuestionamientos internacionales por el control sobre medios de comunicación, la presión sobre el sistema judicial, la reducción de espacios de pluralismo institucional y una política exterior alineada en numerosos episodios con los intereses estratégicos de Vladimir Putin. Esa orientación generó tensiones permanentes con Bruselas y convirtió a Hungría en un actor que, en más de una oportunidad, obstaculizó decisiones clave de la Unión Europea, particularmente en lo relativo al respaldo político y financiero a Ucrania frente a la invasión rusa.

El triunfo de Péter Magyar expresa, en ese contexto, un mensaje inequívoco: la sociedad húngara decidió volver a integrarse plenamente al proyecto europeo, recuperar estándares democráticos exigentes y abandonar una deriva autoritaria que había comenzado a erosionar la calidad institucional del país. Para la Unión Europea esto implica mucho más que un cambio nacional: supone la posibilidad de recomponer consensos estratégicos internos, fortalecer su política exterior común y consolidar el respaldo al pueblo ucraniano en un momento decisivo para la estabilidad del continente.

Este resultado también se inscribe en un fenómeno político más amplio. En Estados Unidos, Donald Trump atraviesa uno de los momentos más débiles en términos de posicionamiento electoral dentro del actual ciclo político, mientras que en América Latina comienzan a observarse señales de desgaste en experiencias recientes asociadas al mismo clima ideológico. En Argentina, por ejemplo, la caída en las encuestas del presidente Javier Milei no responde únicamente al impacto mediático de episodios vinculados a su jefe de gabinete Manuel Adorni, sino fundamentalmente a una economía que, pese a mostrar señales de ordenamiento macroeconómico, todavía no logra traducirse en mejoras visibles en la vida cotidiana de la población, con pérdida de empleo, caída del consumo y expectativas de inversión que aún no terminan de materializarse.

La política internacional vuelve así a recordarnos su naturaleza pendular. Los ciclos de avance de proyectos personalistas y confrontativos suelen ser seguidos por etapas de recomposición institucional y reafirmación democrática. Lo ocurrido en Hungría no es un episodio aislado sino parte de ese movimiento más amplio. Cuando las sociedades perciben que la libertad de expresión se debilita, que el equilibrio de poderes se deteriora o que el aislamiento internacional comienza a comprometer su futuro, el voto se convierte en una herramienta de corrección histórica. Y eso, precisamente, es lo que acaba de suceder en el corazón mismo de Europa.

Washington ABDALA

Abogado. Periodista. y Escritor. Fue Edil, Diputado y Embajador en la OEA.



Solo nos hundan en materia fecal

Un país que no quiere salir de la mesocracia, eso nos hacen vivir. Una interpelación sobre Seguridad y no se comunica más seguridad es solo un ejercicio de retórica vana por parte del interpelado.

En el Uruguay hay miedo, lo reconoce la gente y cualquier encuesta lo muestra. Es raro que nadie haya hecho encuestas en tiempo real a la interpelación, ni que fuera grande el país. Esa maldita tendencia a ser cínicos y no contarnos la verdad en la cara, no sea que alguien se enoje o no ponga tres monedas en alguna publicidad. De los pocos países en que todo se sanatea hasta el infinito.

Los que nos quejamos sobre la inseguridad sabemos que no es política electoral, ni juntada de votos, es preocupación porque no te maten un hijo, porque no te maten a trompadas en una esquina y por el mero deseo de caminar en paz por el país.

Ese es nuestro eje, y no es partidario el tema, si estos números fueran con otro gobierno habría que quejarse de lo mismo.

¿O no vemos la ciudad llena de alienación, gente zombi y violencia por todos lados?

¿Invento algo o lo vemos todo a este loquero colectivo?

No lo entiende del gobierno, creen que es juego político y se defienden como si lo del parlamento fuera un juego de Hegeliano de respuestas.

No lo es, es solo desesperación ante lo obvio.

Y no vengan con facturas del pasado, las que quieran pasar está bien, por algo gobiernan los que gobiernan, se supone que era para mejorar la paz colectiva y no orientan un pito.

De eso se trata el asunto: no tenemos paz, nos afanan, nos empujan, nos hacen sentir inseguros, nos matan y no logran liderar un proceso que revierta la situación.

No es fácil porque hay muchos factores en juego, se entiende, pero es el primer tema de inquietud nacional.

Debería existir una cruzada y el presidente y el ministro informar semana a semana durante un semestre de como va la cosa.

Deberían reprimir más: repito, lleno de situaciones que quiebran la ley, que se violenta la paz ciudadana y que se corre hacia el lado de la defensa del infractor. Reprimir con la ley en la mano no es mano dura, es mano justa. Es lo que manda la Constitución y la ley. NO lo hacen. Incumplen la ley.

No es Bukelización, es cumplimiento de las normas jurídicas. Las de acá, todas, sobran normas, falta cumplimiento.

La policía no tiene toda la confianza que merece, es falso que se está de su lado, no lo veo así, ojalá me equivocara. Hagan encuesta reservada interna y verán, no invento nada, conozco esa barra.

Los ciudadanos no perciben -sí ministro tenemos derecho a percibir como se nos cante- lo que vivimos y no son cifras apologeticas las que funcionan para defender una gestión. Ya agotan con los numeritos que dan lo que la gente no vive.

¿Saben que va a pasar? Que vamos a vivir más desgracias, que esto no se arregla, que emperará y que al ministro un día lo van a sacar cortito. Vendrá otro, que dirá algo parecido y este será tema de campaña electoral. Y así este país se emberretiza y se terrajiza al extremo porque hace crónico lo que no debería serlo.

¿Y saben que presidente Orsi? Eso será parte de su triste legado, porque 4 años y la misma decadencia o degradación solo nos hunde cada vez más en materia fecal.

Un desastre se lo mire por donde se lo mire.





Luis Marcelo PÉREZ
Diputado por el Partido Colorado
Escritor. Periodista. Vicepresidente del PEN
Club Uruguay. Gestor Cultural

La cultura que la derecha dejó vacía

Durante décadas, la discusión cultural se explicó como una disputa de espacios e ideas. Sin embargo, el problema de fondo fue otro. La renuncia de la derecha a producir pensamiento dejó un vacío que otros ocuparon con eficacia. Hoy, cuando ese diagnóstico empieza a asumirse, el escenario ya cambió. La disputa ya no se define por quién controla instituciones, sino por quién logra instalar lo que una sociedad percibe como normal.

Cada vez que se manifiesta de nuevo la idea de batalla cultural, reaparece una afirmación previsible y se reabre la discusión. Se sostiene que el arte, la universidad, la literatura o el pensamiento mayoritariamente están dominados por la izquierda, disfunción que requiere explicación y acción moderada, pero urgente.



Las vanguardias adoptaron sensibilidad progresista por razones históricas concretas. Durante buena parte de los siglos XIX y XX, la derecha y el centro derecho estuvieron abocados a gobernar. Mientras unos administraban el Estado, el mercado y las instituciones, otros ocuparon los márgenes, donde surgen las rupturas. Allí se gestaron revistas, manifiestos, movimientos artísticos y nuevas formas de interpretar la realidad.

Las corrientes innovadoras no nacen desde el poder, sino en tensión con él. Aparecen cuando el lenguaje heredado deja de dar respuesta a la experiencia de una época y cuando el orden vigente se vuelve previsible. No responden a una esencia ideológica, sino a una posición frente a lo establecido. Quien gobierna tiende a preservar. Quien queda fuera necesita cuestionar.

En ese proceso, la derecha cometió un error estratégico. Subestimó la cultura. Se concentró en la gestión y relegó la producción de sentido. Mientras unos construían relatos, lenguajes y marcos interpretativos, otros se limitaban a administrar.

Cuando finalmente advirtió el problema, ya era tarde. No había una conspiración abierta, sino un vacío persistente y largamente desatendido. La influencia progresista se consolidó tanto por su propio desarrollo como por la ausencia de una alternativa intelectual sostenida.

En América Latina ese fenómeno fue aún más marcado. Amplios sectores conservadores redujeron la cultura a gestos protocolares o a una idea superficial

de identidad. Se invocó la tradición sin generar pensamiento. Se preservaron formas sin renovar contenidos. Mientras tanto, el campo cultural se expandía con debates y propuestas impulsadas desde otros ámbitos.

Ese recorrido, sin embargo, tampoco debe idealizarse. Muchas corrientes que nacieron para incomodar terminaron institucionalizándose. La rebeldía se volvió norma. La crítica derivó en vigilancia. En ciertos espacios, disenter dejó de ser un ejercicio intelectual para convertirse en una sanción.

Ese giro explica parte del clima actual. Algunos sectores de la derecha descubren ahora la existente dimensión cultural, pero lo hacen con un diagnóstico tardío y, en muchos casos, con respuestas que miran hacia atrás. Intentan disputar un terreno que ya cambió de forma con herramientas que pertenecen a otra etapa.

Pretender reemplazar una hegemonía por otra, replicando los mismos mecanismos de control, no es una alternativa. Es una repetición. La cultura no se reconstruye con coincidencia ni con obediencia. Se construye con riesgo, con autonomía intelectual y con capacidad de cuestionar incluso a los propios. La oportunidad, si existe, no está en copiar modelos agotados, sino en asumir la tarea postergada. Volver a producir ideas, abrir discusiones, abandonar la comodidad de una gestión sin horizonte. Recuperar la capacidad de interpretar el tiempo en que se vive.

Toda renovación surge cuando alguien rompe inercias, incluso dentro de su propio espacio, y se anima a desafiar lo establecido. La primera etapa de esta historia se definió mientras unos pensaban y otros gobernaban. La que comienza no se resolverá con consignas ni con denuncias, sino con creación.



El nuevo poder cultural no se impone. Se instala. No exige adhesión. Genera hábito. Y cuando una sociedad se habitúa, deja de interrogarse.

Por eso, la cuestión decisiva ya no pasa por identificar quién domina la cultura en términos visibles, sino por reconocer quién está en condiciones de definir qué será percibido como normal en los años que vienen. Porque en esa definición silenciosa, que se despliega en el lenguaje cotidiano, en los hábitos y en las formas de interpretar la experiencia, se juega algo más profundo que una elección o un gobierno. Se juega el sentido mismo de la realidad.

Movimientos de cascara y medias tintas

Promueven y alimentan movimientos de cascara, sin profundidad, y con poco contenido. Continuo intento de alterar el equilibrio y contrapeso de los poderes del Estado. Instituciones impregnadas de falsedad y engaño con el rotulo de justicia social que no impiden desbordes de poder y corrompen. O en el menor de los casos ingenuidad. El equilibrio no elimina a la corrupción, pero ciertamente la reduce. Propuestas legislativas y de gestión hemipléjicas; abordan solo partes del problema y por ende buscan beneficios y reparaciones personales o grupales olvidando el todo. Cuando se daña u olvida «ese todo» se daña a la institucionalidad y a la sociedad en su conjunto.

El reciente caso del policía feroz y asesino. Se persiste en la regulación y el control de armas documentadas, cuando el caso es lo indocumentado y alterado. Las reparaciones para unos y otros no, partícipes del mismo conflicto.

Se habla de un proyecto de ley de libertad anticipada y se excluyen determinados delitos como si fueran parte de otro código penal.

Como solo hay rencor en sus vidas y el perdón no existe; salen en colectivo a neutralizar «la inclusión» siendo que gozan de beneficios pecuniarios y reparadores que van más allá de la lógica equivalencia criminal. Da que pensar; No será parte de la misma estrategia. Del bueno y el malo. La falsa justificación. «Engaña pichanga» Yo quiero, pero no puedo «No puedo contrariar a votantes, dirigentes y legisladores que los representan» Lo de los «Hombres» cada vez mas devaluados, ahora se ataca a la identidad de la descendencia, se introduce el conflicto en las uniones legales. Que mi apellido primero y luego el tuyo.

Dificultando y desdibujando la genética y los derechos civiles.

Parece que entramos en el tobogán de «Vigilados» con conflictos de IA.

La máquina con el contenido humano de su creador y la deshumanización de Samaritan (otra IA).

La interrelación entre las prestaciones de salud y la seguridad. Verdadero desvarío.

Como si debiera haber un médico y un policía al lado de cada individuo.

El enfermo con su médico y la pastillita adecuada a su lado y el individuo desvalido con su policía de custodia.

Todo a solucionar con leyes y disposiciones impracticables.

Ahí sale el Diputado Dr Federico Preve. Propone que los egresados de la Udelar y de las universidades privadas presten dos años de servicios a órdenes y distribuidos por ASSE para cubrir las carencias del Interior del País.

No pueden salir del país y deben manejarse con los niveles salariales de ASSE. Para muchos este bárbaro, pero hay una limitación laboral, la libertad de elección. Por algo empiezan. Tienen misión destructora.

Toda similitud con Cuba es pura coincidencia. Mandaban en misión al exterior y cobraba el Estado. Para el médico un salario con mucho recorte.

Prevé está excluido, ya es egresado, ya hizo su especialidad.

Se olvida que los estudiantes avanzados de medicina con el sostén de la atención primaria de todos los Hospitales públicos.

Mano de obra calificada con bajo salario. Ya retribuyeron al Estado.

Internados y médicos residentes que hacen parte de su formación en hospitales del Interior y son esencia de las puertas de emergencia hospitalaria.

La gran mayoría como ocurre en equivalencia con la población del país permanece y se desempeña en la zona metropolitana pues es donde hay mayor demanda y donde están los centros asistenciales con mayores capacidades tecnológicas.

Permanecen por razones económicas, pero también familiares y profesionales. Es una profesión de continuo aprendizaje y las cátedras y docentes más galardonados están en la capital.



Y ni que decir de la ilegalidad que práctica ASSE, lo mismo el sistema mutual. Los tienen trabajando como empresas unipersonales, sin derecho a licencias, ni aguinaldo, ni salario vacacional. El PIT-CNT calladito. Los prevé calladitos.

Son muchas las facultades públicas y privadas e innumerables las profesiones, doctorados, licenciaturas y tecnicaturas y a ninguna otra le plantean obligaciones de servicios al Estado. ¿Y la libertad de conciencia?

Para hablar del problema de salud mental me voy a referir en la situación de los policías. Es lo mismo que ocurre en otras actividades.

Alcanza grados de mayor intensidad y dramatismo por el uso de armas.

Como lo ha dicho el propio presidente de la república el problema comienza con una mala selección de personal.

A eso se le debe agregar, falta de seguimiento y advertencia de síntomas y cambios de conducta notorios.

Se ha desdibujado la carrera policial y no se cumplen los roles y responsabilidades de cada jerarquía.

Todo se intenta resumir en las figuras de los jefes de unidad, que en muchas oportunidades también están omisos y muy distantes de sus responsabilidades para con el bienestar de sus subordinados.

Las fortalezas físicas y mentales del aspirante a policía parecen parte de un segundo plano, han sido desplazadas por lo académico muy necesario. La intensidad y el stress de la actividad del policía son mayores que las del trabajador común.

Salud mental y física para eventuales situaciones límites.

Se lo ha tratado como un operario y se cree que todo se soluciona con compensaciones monetarias y horarios acotados.

Siempre fueron la excepción de la disponibilidad y sobre carga horaria compensada.

Con la obligatoriedad de aguardar el relevo, el estímulo profesional del reconocimiento superior etc.

Se ha desdibujado la escala jerárquica y compañeros y superiores inmediatos que debieran advertir a los mandos sobre comportamientos llamativos, irregulares, consumos de sustancias, crisis sentimentales, problemas habitacionales y económicos no lo hacen.

Tampoco se alienta a que el propio funcionario transmita sus problemas a los mandos en procura de ayuda profesional, o recurra por sus propios medios a buscarla.

Eso que ocurre a nivel laboral, tiene sus mayores y primeras manifestaciones a nivel familiar.

Cuando las alarmas se encienden hay que acortar los caminos, hacerse responsables y no tirar culpas ni al sistema ni a la institución.

Muchos policías e incluso sus superiores sabedores de situaciones complejas quieren saltarse escalones y recurrir al médico psiquiatra, cuando un médico de medicina general puede actuar en primera fase, lo mismo que los psicólogos.

Otro gran problema que afecta al funcionamiento de la policía es la cantidad de efectivos que están con parte médico por problemas de salud mental por largo tiempo y es necesario solucionar.

Junta médica, reintegro y si no está en condiciones de portar el arma baja. Eso debe establecer en el primer contrato de trabajo.

La sociedad no puede condicionarse en materia de seguridad a la situación de salud mental de los efectivos policiales y tampoco estar expuesta a situaciones horripilantes como lo ocurrido por ese policía que mato a su pareja, a los padres de estas y luego se suicido.

Podría haber sido evitado, si.

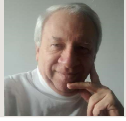
Pero no es un problema de la institución sino de la persona y su ámbito laboral y familiar.

Las culpas y los meritos son particularidades de las personas. En la Policía la responsabilidad institucional viene de los requisitos de ingreso, su distribución en el territorio, el actual sistema disciplinario y la alteración de la pirámide Jerárquica. La burocratización de la función. Hay quienes quieren un arma para sentirse seguros y tener un aire de superioridad. También los hay temerosos y desbordados por las problemáticas de convivencia que asumen el cargo como un trabajo y no como una profesión. Rápidamente se descompensan y desbordan.

Falla la selección y la alerta.



Zósimo NOGUEIRA
Comisario General (r)



Lorenzo AGUIRRE
Periodista. Escritor. Asesor Cultural,
Músico. Director de Orquesta

Que es una verdadera vergüenza, no se pone en duda, porque estas presidenciales peruanas quebrantaron aún más el sentido democrático, toda la estructura respecto a confianza, y demostraron un total ridículo desfilando no solo a lo largo y ancho del país, sino recorriendo el continente. Estos comicios dejaron en evidencia los invalores de uno y otro lado del perfil político en un territorio donde, en una década, ocho protagonistas transitaron con soberbia por el desmejorado sillón presidencial, exhibiendo falta de ética, moral, reflejando «bondades» y realidades de una parte de la población. Una y otra vez las «estrellas» dejaron sobre el tapete un Estado deteriorado, reflejo de sus siniestras mentes, y como broche, el organismo de supervisión electoral permitió 24 horas más tarde, la reanudación de votantes, cuando en forma paralela los despachos de la autoridad que organiza y dirige la consulta popular, «ONPE» – «Oficina Nacional de Procesos Electorales» -, publicaba resultados preliminares, creando, obviamente, panorámicas fragmentadas y con guarismos absurdos.

En efecto, en la secuencia del escrutinio, los porcentajes se volvieron carentes de sentido, y las declaraciones dieron información bastardeada, llegando a la estupidez y ofensa.

A la hora 19.00 del mismo domingo electoral, se manejaron cifras que declaraban la repetida y fatigosa frase «empate técnico entre cuatro candidatos», cuando



en realidad la diferencia entre el primer y cuarto lugar oscilaba en 8 puntos, existiendo incluso hasta 600 mil votos de diferencia, 68% de votantes, más de 2 millones de papeletas en blanco, y casi 1 millón de votos nulos.

A todo lo expresado, gran cantidad de medios de comunicación jugaron con información falsa para incidir hasta último momento en los casi 60 mil votantes frustrados en sus derechos, y a través de esos «conceptos y actitudes democráticas» incluso se empezó una estrategia en la cual no solo se manifestaba quienes pasaban a segunda vuelta, sino hasta se llegó a decir la «necesidad moral» de anular todo el acto eleccionario, dejándolo para el año 2027.

Mientras, también se presionaba hasta reclamar que, en la segunda roda – el próximo domingo 7 de junio - deberían participar los cinco más votados, porque, «hacerlo, rehabilitaba tras el error de impedimento de la instalación de 187 mesas electorales afectando más de 55 mil votantes, aunque, de todas formas, al final de cuentas tampoco comprometía el proceso».

Asimismo, se señaló: la ley electoral de Perú marca que las elecciones solo pueden ser descalificadas si los votos nulos alcanzan dos tercios del total de sufragios emitidos.

Los disturbios, afloraron de inmediato - por supuesto con perfiles políticos definidos - y la controversia suscitó debates jurídicos donde se llegó a considerar

¿Qué esperar en tiempos de crisis moral?

la anulación de resultados, particularmente en la consulta del lunes.

De manera paralela también se expresó: «el número de votantes afectados no alcanza el umbral legal», mientras el candidato de ultraderecha, Rafael López Aliaga convocaba a un plantón frente al «Jurado Nacional de Elecciones», para, sin aportar pruebas, denunciar un «fraude en los comicios», más allá que llamara a la «insurgencia civil», y señalara que no aceptaría el resultado, incluso si él, llegara a pasar a la segunda rueda.

López Aliaga, ex Alcalde de Lima - perteneciente al partido «Renovación Popular», de ideología ultraconservadora, anticomunista, antiinmigración, antifeminismo, anti «LGBT», fundamentalista cristiana -, integrante del «Opus Dei» («Obra de Dios»), (prelatura de la Iglesia Católica fundada en Madrid por Escrivá de Balaguer, y actualmente dirigida por el sacerdote español Fernando Ocariz), y practicante de celibato desde los 19 años, quien expresara el fraude de referencia, eliminó el mensaje donde ofrecía 5.800 dólares a los funcionarios electorales que enviaran evidencias a efectos de respaldar sus acusaciones contra el procedimiento electoral, cuando observó que podría quedar fuera de balotaje.

AL CIERRE DE PÁGINA Las elecciones generales de Perú – 35 candidatos – se llevaron a cabo para elegir presidente, vicepresidente, 190 escaños en el Congreso – 60 senadores, 130 diputados -, y 5 bancas en el «Parlamento Andino» – constituido por representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Chile, es el órgano deliberante, consultivo, y de control político en la «Comunidad Andina», aunque carece de poder legislativo -, para el período 28 de julio 2026 – 28 de julio 2031.

A la hora 02.30 del pasado sábado, cerramos nuestra página de «OPINAR», para la edición del lunes 20 de abril, quedando frustrados porque a lo largo de la semana, no se llegó a la cuenta final de votos.

En la madrugada expresada, el escrutinio pautaba 93.3%, informando que,



hasta el momento, la candidata Keiko Fujimori, de «Fuerza Popular» (posición, derecha, extrema derecha), obtenía 17.06 %, siendo la única que tenía asegurado el pasaje al balotaje. Por su parte, Roberto Sánchez, «Juntos por el Perú» (posición, ultrazquierda), llevaba 12.01%, Rafael López Aliaga, «Renovación Popular» (ultraderecha), 11.93%, Jorge Nieto, «Partido del Buen Gobierno» (posición indefinida... ¿? ¡no sé, si reír o llorar!), 11.07%, y Ricardo Belmont, «Partido Cívico Obras» (posición, centro), 10.15%.

En cuanto a votos en blanco y nulos, los despachos de noticias están marcando 16.63%.

De acuerdo a datos de la «Oficina Nacional de Procesos Electorales» («ONPE»), aproximadamente un 5% de votos han sido impugnados por falta de datos o errores en el llenado de actas. Por lo expresado, esos sufragios serán evaluados por un «Jurado Especial Electoral» antes de ser contabilizados, hecho que, sin lugar a duda, amenaza todavía más la extensión del fatigoso proceso de recuento.

Las misiones de observación electoral pertenecientes a «Unión Europea», y «Organización de los Estados Americanos» («OEA»), avalaron la integridad del procedimiento.

Mitología charrúa

Este año el Día del Patrimonio se ha dedicado al pasado indígena del Uruguay. En general se ha reconocido a grandes realizadores como Alfredo R. Campos y Horacio Arredondo, por su restauración de la Fortaleza de Santa Teresa; a Eladio Dieste, ingeniero innovador; o bien a historiadores tan relevantes como don Juan Pivel Devoto, pionero en el tema. En algunos momentos se celebraron elementos culturales inmateriales como el tango, pero en los últimos años se ha mantenido el espíritu de reconocer a quienes se vinculan a realizaciones que integran el patrimonio mayor del país. Como fue en 2024 a Vidiella y Harriaga por su introducción de la vitivinicultura o a China Zorrilla, por su aporte a la vida teatral uruguaya.

El año pasado nos centramos en el Bicentenario del Desembarco de los 33 Orientales, comienzo del proceso final de la independencia nacional, y en éste se mira hacia los pueblos indígenas del Uruguay. El tema es relevante, ha merecido en los últimos años estudios muy valiosos, pero también -desgraciadamente- una construcción mitológica increíble, basada en falsificaciones y acusaciones destructivas de una identidad nacional que ya no se asienta en los valores de la filosofía liberal que inspiró a nuestros padres fundadores, desde Artigas a José Pedro Varela, pasando por Lavalleja y el vilipendiado Rivera, sino en la culpa por el presunto genocidio de una tribu minoritaria de cultura paleolítica.

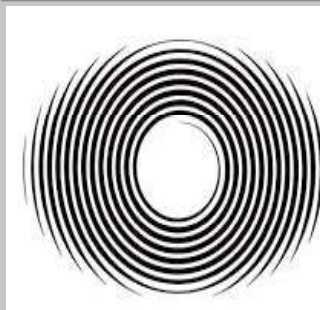
Ya se han realizado actos en instituciones oficiales a cargo de unos fantasiosos «charrúas de apartamento» -como decía Daniel Vidart- y es la hora de que con toda claridad digamos que el Día del Patrimonio no nació para abrir disparatados contenciosos en que la historiografía discute con la mitología. Mucho menos para cargar al nacimiento de la República el presunto genocidio de un pueblo que llegó tardíamente a nuestro territorio, ya diezmado por sus enfrentamientos con la sociedad hispano-criolla y especialmente con la etnia mayoritaria en la región, la guaraní, con la que batalló desde siempre. Recordemos, a solo modo de ejemplo, que en 1702 (ni siquiera existía Montevideo) un ejército de indígenas guaraníes de las Misiones, acristianados por los jesuitas, enfrentó a los charrúas que venían ya pasando el río Uruguay hacia el Este. Ese enfrentamiento, que se ha recordado como la Batalla del Yí, duró cinco días, murieron 280 guerreros charrúas y se aprisionaron 500 personas, entre mujeres y niños, que se distribuyeron en los pueblos de las Misiones. En torno a 1830, no pasaban de 500, según Larrañaga, pero chocaban constantemente con quienes pretendían desarrollar la ganadería y eran víctimas de robos y secuestros de mujeres y niños. A quienes se dicen ser feministas, pero apoyan la teocracia patriarcal de Irán, les recomendamos el libro de Diego Bracco, «Cautivas de indígenas y gauchos», para que, por un momento, asomen a lo que fueron las penurias de esas mujeres en manos de esos varones estereotipados como héroes.

Lo fundamental es que en el Día del Patrimonio poco o nada debería hablarse de los charrúas, y cuando decimos nada es nada, porque nada aportaron a esa larga construcción cultural que es nuestra nación. Y sí, rescatar el enorme aporte guaraní que empieza en nuestro nombre como país y abarca toda la toponimia uruguaya. Desde Uruguay hasta Tacuarembó, Aceguá, Arapey, Camacúa, Tacuarí y Yí, nuestro territorio está identificado por esa lengua. La mitología charrúa, construcción más que moderna, se hizo a fuerza de invisibilizar la tradición guaraní y su mestizaje con la tradicional sociedad criolla. El libro de Susana Rodríguez y Rodolfo González Rissotto es exhaustivo en su demostración.

En el período artiguista fue fundamental su presencia. Recordemos que los Artigas (José Gervasio, como blandengue, y su padre Martín José como alcalde) enfrentaron reiteradamente a grupos charrúas y los documentos -publicados en el Archivo Artigas- testimonian las muertes que les provocaron. En toda esa



Julio María SANGUINETTI
Periodista. Abogado. Senador.
Ex Secretario General del Partido Colorado. Presidente de la República.
FUENTE: diario EL PAIS



etapa revolucionaria, en cambio, la presencia guaraní es fundamental. En el campamento del Ayuí se contaban 400 soldados de ese origen. Es copiosa la documentación probatoria de esa presencia. Hay guaraníes que llegaron a generales como el famoso Andresito, José Andrés Guarucurá, que integró el ejército de Belgrano y luego el artiguista en la lucha contra los lusitanos. Fue un gran bastión en esa frontera norte hasta que en Itacurubí, el 6 de junio de 1819, es derrotado y marcha hacia la prisión de Isla das Cobras en Río de Janeiro, donde falleció. Su historia es ejemplar, no solo como comandante militar, sino como real gobernador de las Misiones entre 1812 y ese nefasto 1819. Su espíritu organizador, su respeto por la gente le ganaron el afecto de nuestro prócer, que siempre le dio un trato de «hijo».

Si la idea del Día del Patrimonio era en este año recordar nuestros orígenes indígenas, bien podría haberse simbolizado en su nombre, con ajuste a la real historia. Tanto se ha invisibilizado el aporte guaraní que está olvidado el Acuerdo de Guaviyú, documentado por Oscar Padrón Favre en «Ocaso de un pueblo indio» y recientemente recordado en una conferencia por Manuel Flores Silva. En ese episodio, el gobierno de las Misiones guaraníes nombra al general Rivera como su jefe y pocas semanas después será fundamental en las tropas con las que el caudillo, en la noche del 21 de abril de 1828, traspasaría el Yí y lanzaría su «fulgurante» campaña de las Misiones, al decir de Luis Alberto de Herrera, que fue el precipitante de nuestra independencia.

Entre los tantos olvidos está que Rivera funda Bella Unión y Durazno con guaraníes, y hermoso es recordar que Juan María Mastai Ferretti (el futuro papa Pío Nono) escribe, en 1824, en su diario de viaje: «...los sobrevivientes de esos pobres indios católicos han sido transportados el año pasado a un punto que se llama Durazno... donde procuran conservar sus costumbres y prácticas piadosas...».

Aspiramos, quizás con ingenuidad, a que toda esta conmemoración no se deslice hacia la mitología,

oscureciendo la historia. Sería muy triste. Pero sabemos que los «charruístas» no reconocen pruebas históricas ni realidades, sino que viven de su invención. Allá ellos, pero que el Estado se haga cómplice de la mistificación ya es harina de otro costal.

Los pobres guaraníes no han tenido suerte histórica en Uruguay.

La «garra charrúa» los ha sepultado y la mitología los ha arrinconado. Hasta que, por su adhesión a don Frutos y la novela de Acevedo Díaz sobre Salsipuedes, los haya etiquetado, sin que se enteraran, como «indios colorados» ...